



## **RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**

### **SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL**

**Medellín, siete (7) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)**

<b>REFERENCIA:</b>	<b>PROCESO ORDINARIO</b>
<b>ASUNTO:</b>	<b>RECURSO DE APELACIÓN</b>
<b>DEMANDANTES:</b>	<b>ADRIAN FELIPE VALENCIA MUÑOZ Y OTROS.</b>
<b>DEMANDADO:</b>	<b>INDEGA S.A</b>
<b>LLAMADA EN GARANTÍA:</b>	<b>EFICACIA S.A</b>
<b>RADICADO:</b>	<b>05001310500820140031903</b>
<b>ACTA No</b>	

La Sala Sexta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, conformada por las Magistradas **ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ, LILIANA MARÍA CASTAÑEDA DUQUE y MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA** procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de **INDEGA S.A** frente a la decisión proferida por la Juez Octava Laboral del Circuito de Medellín al no realizar la práctica de la prueba requerida por la misma, en el proceso que en su contra instauraron **ADRIAN FELIPE VALENCIA MUÑOZ, DAYRON JOAQUÍN BERRÍO CUERVO, LUIS FERNANDO ACEVEDO LÓPEZ, SERGIO ANDRÉS ESTRADA VÁSQUEZ, JUAN CARLOS SEGURO MORENO Y JHON JAIRO PUERTA.**

A continuación, la Sala, previa deliberación sobre el asunto, como consta en el **acta** de discusión de proyectos, adoptó el presentado por la ponente, doctora Ana María Zapata Pérez, el cual quedó consignado en los siguientes términos:

#### **1. ANTECEDENTES DEL AUTO RECURRIDO**

**INDEGA S.A** solicitó en la contestación de la demanda el interrogatorio de parte a los demandantes. En audiencia del 12 de mayo de 2023<sup>1</sup> la Juez decidió que no se practicaría el del señor JUAN CARLOS SEGURO MORENO argumentado que había estado conectado a la reunión mientras se rendían los testimonios, y pese a que se le solicitó se saliera, este continuó en ella.

El apoderado de **INDEGA S.A** insiste la práctica del interrogatorio, señalando que se trata de un error del demandante y no es justo que la sociedad sea quien sufra las consecuencias de tal actuación violentando con ello el derecho de defensa, porque perdería la oportunidad procesal y se evitaría la posible confesión.

---

<sup>1</sup> Primera instancia – archivo 22 y 34.

## 2. CONSIDERACIONES

Pues bien, la competencia de la Sala se contrae a las materias objeto del recurso de apelación, por esta esta razón, el **problema jurídico** que se analizará es si resulta acorde a derecho la decisión de no practicar el interrogatorio de parte que fuera oportunamente decretado, respecto al demandante Juan Carlos Seguro Moreno.

Para efectuar el análisis debe partirse de las siguientes premisas: **i)** El derecho procesal es la mejor garantía del cumplimiento del principio de la igualdad ante la ley, es un freno eficaz contra la arbitrariedad y por ello es un error pretender que en un Estado de derecho se puede administrar justicia con olvido de las formas procesales, sin embargo, se debe tener cuidado de no llegar al extremo en el que el Juez desconozca la prevalencia del derecho sustancial, para dárselo al formalismo o ritualismo que no es adecuado para el caso en concreto y por esa vía deniega o vulnera el derecho al acceso a la administración de justicia, contrariando lo previsto en el **artículo 228 de la Carta Política**; **ii)** La Corte Constitucional en su amplio precedente ha enseñado<sup>2</sup> que uno de los casos en los que se vulneran los derechos fundamentales a la igualdad de las partes, el debido proceso y el acceso material a la administración de justicia, cuando una decisión judicial sacrifica derechos sustanciales en virtud del cumplimiento de los ritos o formas procesales, o en otras palabras, cuando el procedimiento es una barrera para la eficacia del derecho sustancial, circunstancia que se presenta cuando se exige el cumplimiento de requisitos formales de forma irreflexiva y que en determinadas circunstancias pueden constituir cargas imposibles de cumplir para las partes; **iii)** La Alta Corporación ha reiterado que se presenta exceso ritual manifiesto cuando el funcionario judicial no tiene presente que el derecho procesal es un medio para la realización efectiva de los derechos de los ciudadanos; cuando renuncia conscientemente a la verdad jurídica objetiva pese a los hechos probados en el caso concreto, por la aplicación en exceso rigurosa del derecho procesal, pese a que dicha actuación devenga en el desconocimiento de derechos fundamentales".

Así, resulta pertinente detenerse en la situación que se presentó en la diligencia del pasado 12 de mayo de 2023, en lo pertinente<sup>3</sup>. En efecto, estando próximos a terminar la audiencia de trámite y juzgamiento, el apoderado de INDEGA S.A. solicita la palabra para informar: **"Es que falta el interrogatorio de parte a uno de los demandantes"**, a lo que la Juez contesta **"doctor, el señor Juan Carlos Segura Moreno ¿está escuchando?"**

<sup>2</sup> T- 1306 de 2001, T-1123 de 2002, T-950 de 2003, T- 289 de 2005, T-264 de 2009, T-429 de 2011, SU-636 de 2015.

<sup>3</sup> Primera instancia – archivo 34 minuto 45.

En ese momento ese demandante contesta: ***“señora juez ya tengo activo el micrófono y la cámara”***, a lo que la funcionaria manifiesta: ***“sí, hace rato que tiene activado el micrófono y la cámara. Ósea que usted ha escuchado parte de la prueba testimonial, entonces está contaminado con la misma (...)”***. Al señor Juan Carlos Segura se le escucha decir NO, pero la A quo sin darle la oportunidad de explicar lo sucedido afirma: ***“yo he estado atenta señor, yo he estado atenta a su... se ha conectado hace rato y escuchó los testigos de las partes por ello el despacho no le va a hacer interrogatorio”***.

Para esta corporación, la decisión adoptada por la Juez en manera alguna encuentra sustento en nuestro ordenamiento jurídico, por lo siguiente:

Sea lo primero señalar, que de acuerdo a lo previsto en el **artículo 53** del Código Procesal del Trabajo modificado por el artículo 8º de la Ley 1149 de 2007, el Juez podrá en decisión motivada, **rechazar la práctica** de pruebas y diligencias **inconducentes** o **superfluas** en relación con el objeto del pleito. Y se verifica que ninguna de estas razones se esboza para denegar la práctica del interrogatorio al señor JUAN CARLOS SEGURO MORENO.

Revisados los **artículos 199 a 204** que regulan el medio probatorio de interrogatorio de parte en el Código General del Proceso, en manera alguna se consagra una prohibición referida a que la parte presencie o escuche la declaración de los testigos del proceso; circunstancia que se encuentra prevista en el **artículo 220** del estatuto procesal pero sólo respecto a los testigos, al consagrar expresamente lo siguiente: *“Los testigos no podrán escuchar las declaraciones de quienes les precedan”*. Debiéndose incluso enfatizar en que, si ello sucediera, la consecuencia no es otra que la de exigir al Juez un análisis más riguroso de su contenido en el momento de fallar, de acuerdo con las circunstancias de cada caso (**artículo 211** del CGP).

Finalmente, es en este contexto que razón le asiste al apoderado de INDEGA S.A. porque la decisión adoptada sin duda vulnera el debido proceso, habiéndose consagrado en el **artículo 29** de la Carta Política como un derecho fundamental según el cual, nadie puede ser juzgado sin observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio, con el derecho a presentar pruebas y que estas sean practicadas conforme a lo previsto en nuestro ordenamiento. Para esta corporación la vulneración se evidencia no solo por haberse adoptado una decisión que no encuentra fundamento en nuestro ordenamiento jurídico, sino que con ella se resulta trasladando a la pasiva las consecuencias jurídicas derivadas de la presencia del demandante en la audiencia, situación que en manera alguna fue controlada por la directora del proceso; si es que dadas las circunstancias del caso, encontraba razones atendibles para que el señor

SEGURO MORENO no estuviera en el acto de recepción de la prueba testimonial. Y es que no resulta atendible que, aun teniendo claridad sobre su presencia a lo largo de la diligencia, la Juez le permitiese estar sin advertencia alguna, para finalmente impedir que absolviera el interrogatorio de parte decretado a instancias de la sociedad demandada, de quien ninguna actuación reprochable se predica; pero resulta siendo la directamente afectada con la decisión que se confuta.

Es el conjunto de consideraciones precedente el que impone **REVOCAR** la decisión adoptada, para en su lugar, ORDENAR la práctica del interrogatorio de parte al demandante JUAN CARLOS SEGURO MORENO. Y al prosperar el recurso de apelación, no se condena en COSTAS a la demandada.

### **3. DECISIÓN**

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Sexta de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, **DECIDE:**

**PRIMERO: REVOCAR** la decisión adoptada el **12 de mayo de 2023** de acuerdo con el análisis efectuado en esta providencia, para en su lugar, ORDENAR que sin mayores dilaciones se fije la audiencia pública para realizar la práctica del interrogatorio de parte al demandante JUAN CARLOS SEGURO MORENO.

**SEGUNDO:** Sin COSTAS en esta instancia.

Lo anterior se notifica por ESTADOS. Se firma en constancia por los que intervinieron.

**Las Magistradas,**



**ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ**



**LILIANA MARÍA CASTAÑEDA DUQUE**



**MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA**

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL  
SUPERIOR DE MEDELLÍN – SALA LABORAL -  
HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por  
estados N ° 188 del 04 de octubre de 2023.

**consultable aquí:**

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/147>